



#OPINIÓN

La antesala de la captura final de los contrapesos institucionales y del fin de la democracia participativa está a las puertas del país, aunque muchos no lo adviertan

¿LA RUTA A LA REGRESIÓN?



Es la primera vez en 30 años que el gobierno impulsa una reforma electoral sin partir de los reclamos de la oposición, como siempre se había hecho, me dijo en entrevista el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Tras el anuncio de la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y sin conocer aún el texto, Córdova consideró que la propuesta representa una regresión autoritaria, sobre todo si resulta similar al "Plan A" fallido del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo principal objetivo fue aniquilar al instituto electoral.

El dirigente del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda Hoeflich, me expresó que el propósito de hacer una reforma desde el poder, es perpetuarse en el poder. Las cosas parecen encaminarse así.

El encargado de llevar a cabo la reforma electoral morenista, con la que se busca doblegar a la autoridad electoral y eliminar la autonomía que hizo posible la transición democrática, será Pablo Gómez. Será, junto con funcionarios federales y consejeros cercanos a la presidenta Sheinbaum, el único con experiencia electoral suficiente para negociar, redactar y proponer el futuro del sistema democrático.

Gómez tendrá la tarea de elaborar la reforma en un proceso cerrado al oficialismo, con mínima presencia y sin voto de la sociedad civil, el sector académico y la oposición.

El riesgo: dismantelar los pilares de la democracia nacional, como la representación plural en el Congreso, la equidad en la contienda y, especialmente, la autonomía, competencia y profesionalismo del INE.

En otras palabras, el fin de la democracia mexicana que, en su forma y esencia, permitió el ascenso de la 4T al poder.

La eliminación de los plurinominales y la reducción del financiamiento a partidos, propuestas que los aliados de Morena rechazan, parecen ser la base del planteamiento oficial. Habrá que ver hasta qué punto estarán dispuestos a negociar y ceder. Con un partido fragmentado por escándalos y una dirigencia ansiosa por mostrar autoridad, Morena enfrenta una prueba de fuego que marcará el rumbo hacia 2027, donde se darán las elecciones intermedias y habrá cambio de gubernaturas en 16 estados, y sentará las bases de las elecciones de 2030.

Un aspecto poco mencionado es la ausencia de ciudadanía en todo el proceso. Como en la reforma judicial —donde se simuló diálogo y participación para luego aprobarla sin cambios—, la reforma electoral podría seguir la misma ruta, con el gran ausente de siempre: la participación ciudadana.

La antesala de la captura final de los contrapesos institucionales y del fin de la democracia participativa está a las puertas del país, aunque muchos no lo adviertan. Esto, aunque se envuelva el regalo en argumentos como que el financiamiento público deba acabar y que haya menos diputados.

Si esta reforma no genera la misma indignación que los casos de viajes, vínculos delictivos o enriquecimiento ilícito en el partido oficialista, podríamos estar presenciando una regresión democrática que el PRI, en su época dorada, habría envidiado.

CARLOSZUNIGAPEREZ@GMAIL.COM / @CARLOSZUP

**El propósito
de hacer una
reforma desde
el poder es
perpetuarse en él**